

**MINUTA**  
**COMISIÓN DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL DEDUCIDA EN CONTRA DE S.E. EL PRESIDENTE**  
**DE LA REPÚBLICA**

**DR. CLAUDIO NASH ROJAS**  
**Académico Universidad de Chile**  
**6 de diciembre de 2019**

<b>¿CUÁL ES LA RELEVANCIA HISTÓRICA DE ESTA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL?</b>
---

El objeto de la Comisión es analizar la responsabilidad política del Presidente de conformidad con el artículo 52, inciso a) Nº2 de la Constitución Política, generando un informe que quedará en la historia porque determinará el estándar del siglo XXI acerca de cómo se valoran jurídica y políticamente los DD.HH., y cuáles son los límites infranqueables, aún en momentos de crisis, que garantizan la plena vigencia de esos derechos.

- Es un proceso inédito en nuestra historia porque estamos ante una acusación constitucional al Presidente en ejercicio por “graves violaciones de derechos humanos” (DD.HH.), como lo estableció el 6 de diciembre el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
- Es un juicio político histórico y el informe que se presente, así como la votación en Sala de la H. Cámara de Diputados será el **estándar de responsabilidad política en el siglo XXI frente a los casos más graves de violaciones de DD.HH. vividas en democracia**. La postura que ustedes adopten H. Diputados, será el parámetro con el que será evaluada la respuesta política ante futuras crisis de DD.HH. que ocurran en Chile.

Los DD.HH. son un compromiso ético y jurídico acerca de cuáles son los límites infranqueables del Estado y sus agentes, y honrar ese acuerdo es lo que está en juego. La gravedad de la Acusación es que sostiene que ese límite infranqueable no se ha respetado desde el 18 de octubre de 2019, y todos los informes nacionales e internacionales que conocemos a la fecha, incluido los solicitados por el propio Presidente, dan cuenta de un cuadro de graves violaciones de derechos humanos, que se han mantenido repetidamente en el tiempo y que han afectado masivamente a la población.

<b>¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE EN MATERIA DE DD.HH.?</b>
--

El Presidente de la República tiene obligaciones en materia de DD.HH. que están establecidas constitucionalmente y en los tratados internacionales vigentes en Chile.

- En un Estado de Derecho, el Presidente y todas las autoridades de están obligados (art. 6, CP) a cumplir con las obligaciones constitucionales e internacionales de respeto y garantía de los DD.HH. (art. 5, inciso 2º, CP). **Conforme a ello, está claramente establecido a nivel constitucional que en Chile el Presidente tiene obligaciones directas en materia de garantía de DD.HH.**
- La violación a los DD.HH. se produce cuando existe un incumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales atribuibles al Estado (Principio de Naciones Unidas sobre Responsabilidad Internacional del Estado, 12 de diciembre de 2001).
  - La responsabilidad que surge por las violaciones de DD.HH. tiene distintas dimensiones cuando se trasgreden de los límites infranqueables de respeto a esos derechos, ya sea por acción u omisión de agentes del Estado: responsabilidad estatal, responsabilidad penal individual, responsabilidad de mando y **responsabilidad política**.
  - El Presidente y las autoridades estatales siempre deben adoptar medidas **eficaces y oportunas para garantizar derechos humanos** y cuando existe un cuadro de graves violaciones de DD.HH., las medidas deben ser las necesarias y suficientes para evitar que éstas sigan produciéndose (Corte Interamericana de Derechos Humanos).

En el marco de esta Acusación, la H. Cámara de Diputados debe determinar y valorar, con fundamentos jurídicos y, basándose en los hechos ocurridos, si el Presidente adoptó todas las medidas a su alcance para que las violaciones graves denunciadas no se produjeran y una vez constatadas, para que no continuaran afectando a la población. Esta valoración será la constancia para la historia de Chile, de si sigue o no vigente para el Estado el acuerdo ético, político, jurídico y social de respeto a los DD.HH. que desde 1990 en Chile se juzgaba infranqueable.

#### ¿CÓMO EVALUAR EL COMPROMISO DEL PRESIDENTE CON LA PROTECCIÓN DE LOS DDHH?

**Las interrogantes fundamentales** que permiten evaluar la responsabilidad política del Presidente al amparo de las normas internacionales ratificadas por Chile y a las nacionales vigentes relativas a la protección de los DD.HH., **se refieren exclusivamente a determinar cómo actuó (qué hizo y qué dejó de hacer) para evitar las repetidas denuncias de tortura, vejámenes sexuales y mutilaciones.**

- ¿Qué medidas eficaces, oportunas, necesarias y suficientes adoptó el Presidente como máxima autoridad administrativa del país?
- En concreto, se debe determinar ¿qué decretos supremos, instructivos u otros instrumentos dan cuenta de las medidas positivas eficaces adoptadas por el Presidente?, para que no continuaran denunciándose repetidamente casos de tortura, vejámenes sexuales y mutilaciones.
- También se debe valorar políticamente si sus actuaciones y dichos generaron o agravaron la situación de riesgo para los DD.HH. de la población en un momento de convulsión social.

**Frente a una situación de creciente violencia contra la ciudadanía**, tanto la relacionada con las manifestaciones como la que fue afectada en calidad de meros transeúntes, **las únicas medidas que se informan en el Capítulo IV de la defensa del Presidente son reuniones, solicitudes de informes y llamados a la coordinación institucional, pero en ningún caso se especifican medidas correctivas eficaces, oportunas, necesarias y suficientes.**

- La defensa del sr. Presidente no da cuenta de medidas concretas que como máxima autoridad de la República haya adoptado después del 18 de octubre para impedir que se siguieran repitiendo las violaciones de DD.HH. denunciadas judicialmente. Las medidas informadas más bien dicen relación con temas ajenos a la Acusación, tales como su agenda social y las reformas legales relativas a la seguridad y orden públicos.
- Pese a la evidencia empírica del cuadro de violaciones de DD.HH. que se desarrolló desde el 18 de octubre y que la Comisión Interamericana ha calificado de “graves” y “persistentes”, el Presidente evitó condenar estas violaciones públicamente. Además, el 21 de octubre señaló por cadena nacional que *“estamos en guerra contra un enemigo poderoso”*, en momentos de estado de emergencia y con los militares en la calle. El efecto fue un alza evidente en el número de personas heridas por disparos y con daño ocular como da cuenta más adelante.
- Tampoco el Presidente o sus autoridades directamente dependientes han informado medidas que hayan adoptado para establecer responsabilidades de mando en Carabineros. Al contrario, las medidas públicas del Presidente han sido avalar la actuación de Carabineros, aún en los eventos represivos más complejos.

**Además, la defensa del Presidente pone especial énfasis en las medidas que ha adoptado para facilitar las investigaciones de las violaciones de DD.HH.** Esto es importante, pero en ningún caso es una medida que lo exima de responsabilidad alguna.

- Por una parte, porque se reconoce que estas violaciones existen y deben ser castigadas penalmente; es evidente que también procede asumir la responsabilidad política.
- Por otra, estas medidas sólo dan cuenta del cumplimiento de un mínimo constitucional, ya que el Presidente no podría entorpecer dichas investigaciones incurrir en nuevos ilícitos constitucionales, legales e internacionales.

**Los hechos que constituyen el centro de atención para evaluar la acción u omisión por parte del Presidente son las mutilaciones oculares ocurridas desde el 17 de octubre.**

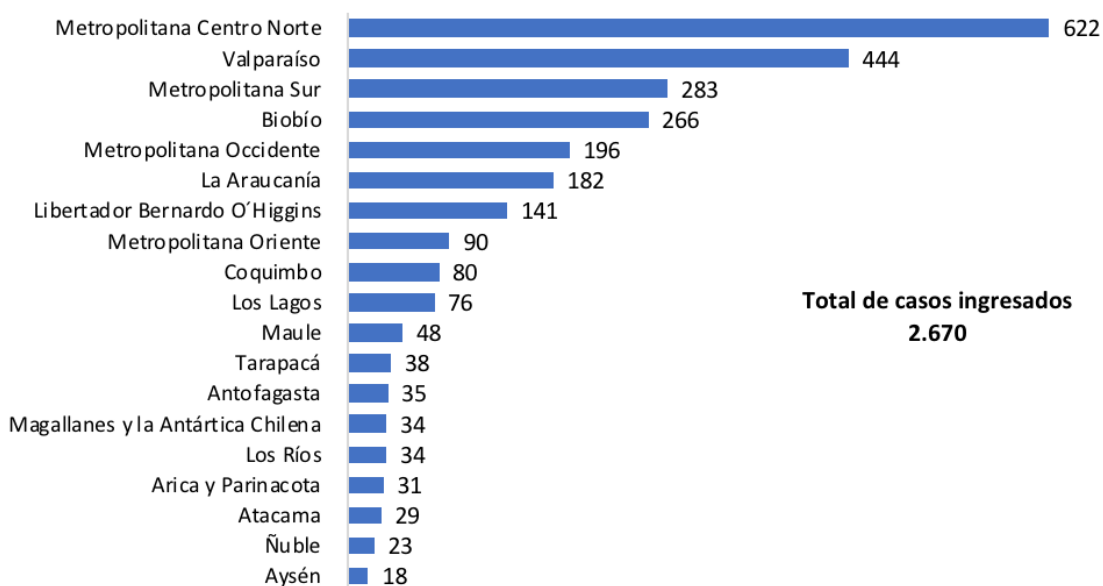
- El 4 de noviembre el presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, Dennis Cortés, informó ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado su la conclusión gremial considerando el periodo que va del 19 de octubre al 2 de noviembre.
  - Informó que *“en total son más de 1.900 lesionados por balines. De ellos, 300 tenían lesiones oculares. Nosotros tenemos prácticamente la mitad de ese número en dos semanas. Por lo tanto, acá tenemos claramente una emergencia sanitaria que tenemos que darle un pare”*. Relató que sólo al Hospital del Salvador llegaron 133 pacientes con traumas oculares severos, y que otros 40 casos se registraron en otros centros de atención de Santiago y regiones.
  - Indicó que, haciendo una *“revisión exhaustiva del número de casos de pacientes que han perdido el globo ocular por uso de armas no letales, el número es muy alarmante y lideramos tristemente esta cifra a nivel internacional”*.
  - Aseguró que la revisión realizada analizó los datos de los últimos 27 años, incluyendo a *“personas que fueron dañadas por armas no letales en manifestaciones o áreas de conflictos, incluyendo Israel, Palestina, Jerusalén y Gaza”*.
- El 8 de octubre la oficina en Chile del Alto Comisionado de Derechos Humanos solicitó al gobierno no usar perdigones por los daños indiscriminados que estaba ocasionando en la población.
- El 10 de noviembre, el Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, respondió medialmente a las críticas de organismos internacionales y nacionales sobre el uso de la fuerza por parte de Carabineros, descartando la modificación de sus protocolos de actuación para impedir el uso de balines. El mismo día se emitió el reporte de Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informando las cifras alcanzadas a recopilar en sus observaciones directas indicando la constatación de 197 personas con heridas oculares como cifra acumulada durante el estado de excepción.



**Fuente:** Informe “Información constatada por el INDH al 03-12-2019 a las 14.00 hrs.”, pág. 7.

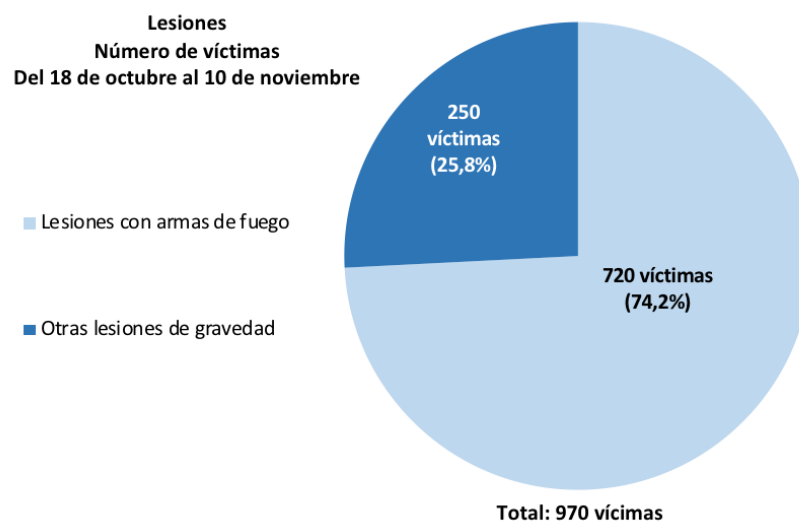
- En concordancia con la repetición de casos observados por el INDH, el Ministerio Público informó que también entre el 18 de octubre y el 10 de noviembre abrió 2.670 investigaciones por violaciones a los DD.HH. que habrían sido cometidas por agentes del Estado. De ellas, 2.242 corresponden a actos atentatorios cometidos en contra de adultos y 422 en contra de niños, niñas o adolescentes.

**Número de Víctimas Institucionales por Fiscalía Regional**  
**Total de casos ingresados al Ministerio Público**  
**Del 18 de octubre al 10 de noviembre de 2019**



**Fuente:** Elaboración propia con base en el Informe "Cifras de Violencia Institucional del 18 de octubre al 10 de noviembre de 2019", pág. 2.

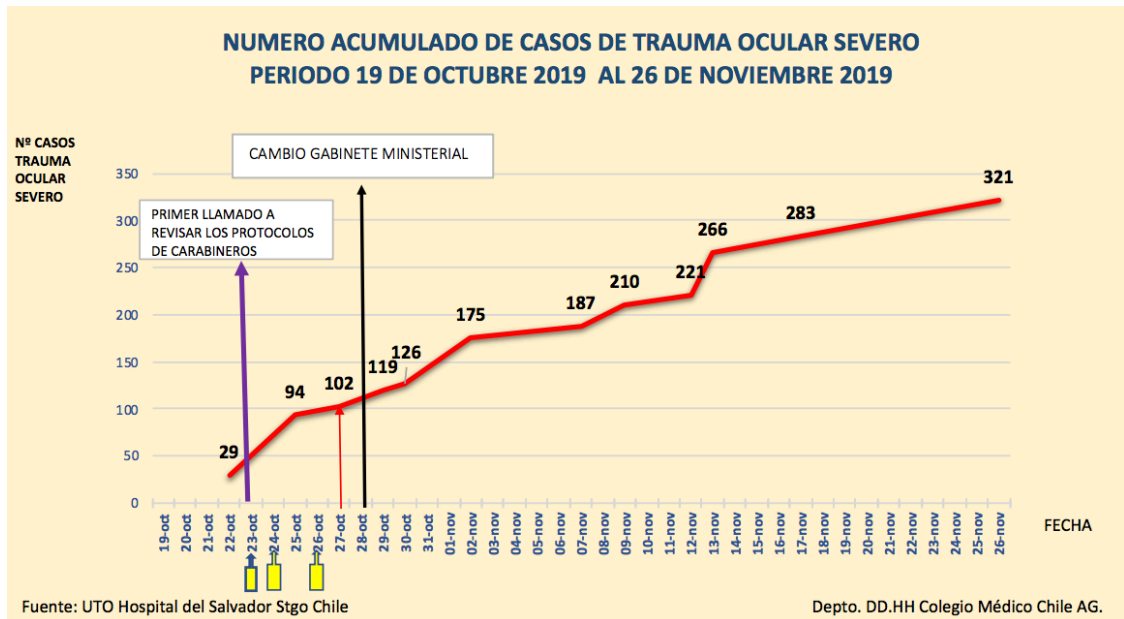
Por su parte, las lesiones con armas de fuego ingresadas al Sistema de Apoyo a Fiscales del Ministerio Público ascendían a un total de 720, es decir, **el 74,2% del total de denuncias por lesiones. Considerando el número de casos ingresados, las lesiones con armas de fuego representan el 27% de los 2.670 casos ingresados a nivel nacional en el mismo periodo de 23 días.**



**Fuente:** Elaboración propia con base en el Informe "Cifras de Violencia Institucional del 18 de octubre al 10 de noviembre de 2019", pág. 4.

- El 18 de noviembre se difundió el "Estudio de perdigón - Informe final (UTO)", realizado por el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, a solicitud de la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador. En él se estableció que *"el material de los proyectiles está compuesto mayoritariamente por minerales y metales de alta dureza"* y sólo en 20% por goma o caucho, lo cual hace *"que se aumente significativamente el daño que producen los balines"*. En definitiva, se determinó que el 80% está conformado por *"minerales o metales de alta dureza como sílice y sulfato de bario, además de plomo"*.

- La Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador, a donde se concentran las atenciones especializadas de la Región Metropolitana, registró la recepción inicial de 29 casos de trauma ocular severo el 22 de octubre, para llegar a 321 el 26 de noviembre. Sólo en 16 días la cantidad de personas mutiladas se multiplicó 11 veces.



- Recién el 20 de noviembre, cuando sólo la Unidad de Trauma Ocular contabilizaba más de 300 casos de trauma ocular severo, el general director de Carabineros, Mario Rozas, ordenó formalmente a la institución que dirija la prohibición de el uso de balines y perdigones para disolver manifestaciones indicando que *"sólo podrán ser usados como una medida extrema y de legítima defensa"*.
- El 20 y 21 de noviembre la Sociedad Chilena de Oftalmología reiteró que la cantidad de lesionados en los ojos por balas de goma no solo es récord en la historia de Chile, sino del mundo. Determinó que las cifras de víctimas oculares durante las protestas habían superado a las 220 personas con un promedio de edad de 29,8 años, y que de ellas, el 60% presentaban una disminución severa de la visión, mientras que casi el 30% quedó completamente ciega de un ojo por presentar el globo ocular estallado y sin posibilidad de recuperación visual. También dio cuenta de otros 74 casos más registrados en otros centros de atención, tanto en Santiago como en regiones.
- El 26 de noviembre, *Human Right Watch* informó que entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 11.564 personas heridas, contabilizando 220 lesiones oculares documentadas por disparos de escopetas antidisturbios. Ese mismo día el INDH informó acerca de la presentación de una querrela por homicidio frustrado a favor de F.C.R. de 36 años, quien de acuerdo a lo denunciado, perdió de inmediato el ojo izquierdo al recibir un impacto de lacrimógena disparada por Carabineros mientras .esperaba locomoción para dirigirse al turno de noche de su trabajo.
- El 28 de noviembre, habiéndose llegado a 232 personas con heridas oculares según cifras del INDH, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, aseveró: *"quiero decir categóricamente que los fallos que impiden el uso de la escopeta (antidisturbios) están promoviendo el uso del arma letal"*. La declaración gubernamental fue efectuada después de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió prohibir a Carabineros usar las escopetas de balines *"a todo evento"*, acogiendo el recurso de reposición interpuesto por la Universidad de Valparaíso que antes había presentado un recurso de amparo para prohibir el uso de perdigones en manifestaciones pacíficas.

- **Prohibir el uso de balines y perdigones para disolver manifestaciones determinando que "sólo podrán ser usados como una medida extrema y de legítima defensa", fue una medida necesaria, pero las cifras indican que no fue oportuna, ni tampoco ha sido eficaz y suficiente.**

Fue emitida el 20 de noviembre, pero conforme a lo observado por el INDH, al 6 de diciembre el número de víctimas continuó para llegar a 352 registrando el total de afectados un crecimiento de 78,7%. De ellos, 21 personas presentaban pérdida ocular, 331 lesión o trauma ocular, y 1.983 habían sido heridos con disparos en otras partes del cuerpo.

A esa misma conclusión llegó la CIDH al determinar el 6 de diciembre *"la existencia de conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes en el contexto de las recientes protestas sociales"* y *"su extrema preocupación por el elevado número de personas que han sufrido traumas oculares"*. Los organismos privados internacionales, así como el INDH, las defensorías Penal Pública y de la Ninez, han planteado exactamente lo mismo sobre el abuso de la utilización de escopetas.

**En definitiva, el Presidente es directamente responsable por actos de administración (positivos y omisiones) que tuvieron directo impacto en que el cuadro de graves violaciones de DD.HH. vividas en el país se generara, se agravara y persistiera en el tiempo.**

<p><b>¿CUÁLES SON LAS BASES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS POR EL SR. PRESIDENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DDHH?</b></p>
--

**La H. Cámara debe responder si el Presidente hizo todo lo que estaba dentro de sus funciones para evitar que se mantuvieran en el tiempo las graves violaciones de DD.HH. ocurridas a partir del 18 de octubre. Para ello es necesario revisar cuáles son las obligaciones y funciones propias del Presidente, con el fin de despejar si estamos ante responsabilidad propia o por terceros como sostiene la defensa del Presidente.**

- La Constitución Política consagra el principio de servicialidad (arts. 1 y 5) que indica que el Estado está al servicio de la persona humana, y para lograrlo es indispensable el cumplimiento de las leyes (arts. 6 y 7).
- **La base de la supremacía del poder civil en una sociedad democrática está determinada por la responsabilidad última que se le entrega a la máxima autoridad del Estado que es el Presidente de la República, para adoptar todas las medidas necesarias que garanticen la seguridad y orden públicos.**
  - *"El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes"* (art. 24, CP).
- **Legalmente, es de responsabilidad del Presidente la conservación del orden público a través del cumplimiento de las funciones de Carabineros, y la ejerce a través del Ministro del Interior.**
  - *"El Presidente de la República ejerce el gobierno y la administración del Estado con la colaboración de los órganos que establezcan la Constitución y las leyes"* (art. 1, Ley de Bases de Administración del Estado).
  - El Ministro del Interior es *"el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en asuntos relativos al orden público y la seguridad pública interior, para cuyos efectos concentrará la decisión política en estas materias"* (art. 1, Ley 20.502 que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública).
  - Carabineros *"dependerá directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública"* (art. 1, LOC de Carabineros)

- **La Constitución Política le entrega al Presidente la facultad de dictar estados de excepción constitucional, depositando la confianza plena en su autoridad política para establecer límites al ejercicio de los DD.HH. con el fin de restablecer el orden y la seguridad públicos.**
  - Constitucionalmente, el Presidente de la República es la única autoridad del Estado llamada a establecer límites al ejercicio de los DD.HH. (art. 43, Nº4, CP), y a la medianoche del 18 de octubre ejerció su facultad exclusiva de decretar el estado de excepción para restablecer el orden público, pero implementándolo en forma jurídicamente errada y generando en los hechos un escenario propicio para la sucesión repetida de violaciones de DD.HH. que ya son objeto de atención y condena de organismos internacionales y privados de protección de DD.HH.
  - El Decreto Supremo que dictó el Presidente no señaló ni los derechos que serían limitados, ni tampoco la forma en la que éstos podían ser restringidos por la autoridad militar a cargo, por lo que adoptó medidas de suspensión de derechos sin base constitucional alguna. Por ello, ninguno de los DD.HH. violados que fundan la Acusación pueden ser objeto de suspensión constitucional, por lo que rigen y siguen regido plenamente, y sus violaciones no pueden ser justificadas por la situación excepcional de emergencia.
  - En consecuencia, en vez de establecer por Decreto Supremo los límites al ejercicio de los DD.HH. en el país para restablecer el orden y seguridad pública ante manifestaciones sociales y hechos delictivos que ocurrían por separado, el Presidente generó un mensaje equívoco porque -sin discernir protestas de ciudadanos con hechos delincuenciales- decidió anunciar por cadena nacional desde la Guarnición Santiago el estado de excepción aseverando que *“estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”*.
- **La conservación del orden público a través de Carabineros es responsabilidad del Presidente, y la ejerce a través del Ministro del Interior.**
  - Quien está en condiciones de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que Carabineros cumpla con sus funciones es el Presidente de la República, no es de responsabilidad de terceros. Conicida con dicha interpretación jurídico constitucional Luis Hermosilla, quien en calidad de abogado defensor del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, el 28 de noviembre pasado ante la H. Cámara de Diputados, afirmó que *“acusan a mi defendido como si él fuera el que preside el gobierno”*, añadiendo que *“dejó su cargo hace un mes, y en ese mes han ocurrido situaciones que son, no sólo complejas, sino que reprochables”*.

**En materia de DD.HH. se considera que cuando se crea una situación que implica declaración de estado de excepción para restablecer el orden y seguridad públicas, y se van registrando y denunciando repetidamente actos policiales y militares que generan graves violaciones a los DD.HH., aunque no hayan sido ordenados por el Presidente, es él quien tiene la obligación en el ámbito de sus funciones de garantizar y adoptar medidas correctivas eficaces, oportunas, necesarias y suficientes para evitar su ocurrencia.**

**Esta es la base de la Acusación y de la valoración que debe realizar la H. Cámara. Estamos ante incumplimientos de obligaciones constitucionales, internacionales y legales directamente atribuibles al Presidente. El juicio político es la valoración de estos incumplimientos.**

## ¿CÓMO EVALUAR LA GRAVEDAD DE LOS INCUMPLIMIENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL PRESIDENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DDHH?

La cuestión central que debe resolver la H. Cámara es un juicio político sobre la gravedad de los actos del Presidente por acción u omisión, en relación con las violaciones de DD.HH.

- Desde los primeros días los organismos internacionales y privados de DD.HH. hicieron ver la **gravedad de la situación, y llamaron a la adopción de medidas correctivas**. Tanto la Comisión Interamericana (23/10) como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Chile (08/11), llamaron la atención sobre la gravedad de la situación de los DD.HH. en Chile.

**Conforme a una evaluación de gravedad que Chile ha asumido nacional e internacionalmente, incluidos tratados de Derecho Penal Internacional, las violaciones de DD.HH. denunciadas en la Acusación pueden llegar a ser considerados actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, pudiendo convertirse incluso en actos base para el ejercicio de jurisdicción universal.**

**Al 6 de diciembre, el INDH registra:**

- **Mutilaciones oculares** en niveles nunca vistos no sólo en la historia de Chile, sino en la historia de la humanidad, llegando a 241 el total de personas con herida ocular observadas.
- **Tortura y violencia sexual**, con 517 y 106 querellas presentadas, respectivamente, consistiendo los actos de violencia sexual denunciados en desnudamientos, tocaciones, amenazas de violación, y habiendo 4 denuncias por violación.
- **Violencia contra niños, niñas y adolescentes**, informando un total de 179 casos.

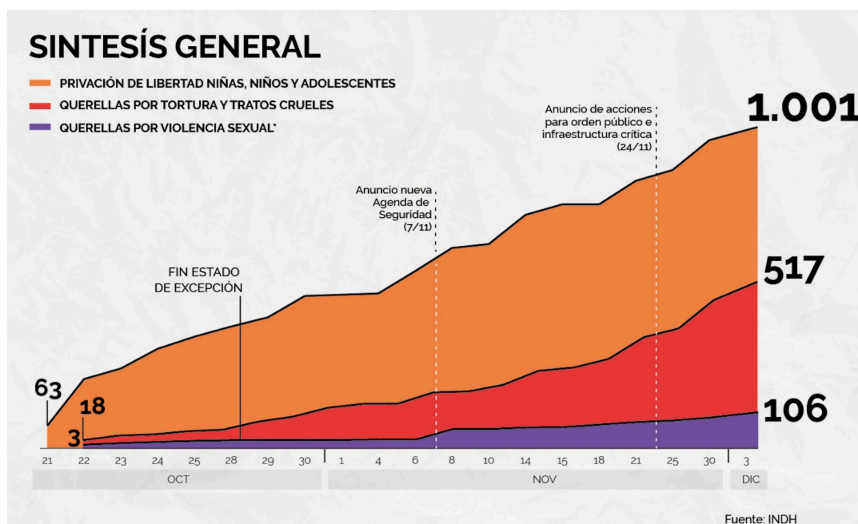
Hasta el 3 de diciembre, un total de **1.499 vulneraciones de derechos en comisarías** han observado el INDH en el país. De ellas, los casos nacionales **el acoso sexual y el desnudamiento concentran el 24,1% (361 casos) de las vulneraciones, mientras que los apremios ilegítimos representan un 16,7% (250 casos).**

Región	Uso excesivo de la fuerza en la detención	Acoso / Violencia sexual	Desnudamiento	Apremios ilegítimos	Vejación injusta	Otras vulneraciones	Total
Antofagasta	39	13	11	9	12	0	84
Araucanía	2	0	0	0	0	0	2
Arica y Parinacota	3	3	3	0	0	0	9
Atacama	3	0	0	2	0	0	5
Aysén	15	0	0	14	5	1	35
Bío Bío	35	2	1	47	0	2	87
Coquimbo	28	28	28	2	0	0	86
Los Lagos	18	0	0	0	0	0	18
Los Ríos	25	3	3	11	3	0	45
Magallanes	30	0	0	0	0	0	30
Maule	108	13	12	32	1	0	166
Metropolitana	273	91	81	56	36	19	556
Ñuble	30	6	6	6	0	11	59
O'Higgins	15	0	0	0	0	0	15
Tarapacá	41	0	0	17	1	0	59
Valparaíso	86	31	26	54	46	0	243
<b>Total</b>	<b>751</b>	<b>190</b>	<b>171</b>	<b>250</b>	<b>104</b>	<b>33</b>	<b>1.499</b>

**Fuente:** Informe "Información constatada por el INDH al 03-12-2019 a las 14.00 hrs.", pág. 10.

Entre el 21 de octubre y el 3 de diciembre, tal como lo constataron la CIDH y HRW, **los casos observados por el INDH de privación de libertad de menores de edad, así como las querellas por tortura y violencia sexual, exhiben un comportamiento incremental progresivo en el tiempo**, sin que el fin del estado de excepción o los anuncios de la agenda presidencial de seguridad pública generaran una corrección en cuadro de violaciones a los DD.HH. existente.





Fuente: Elaboración propia con base en cifras informadas por el INDH al 3 de diciembre de 2019.

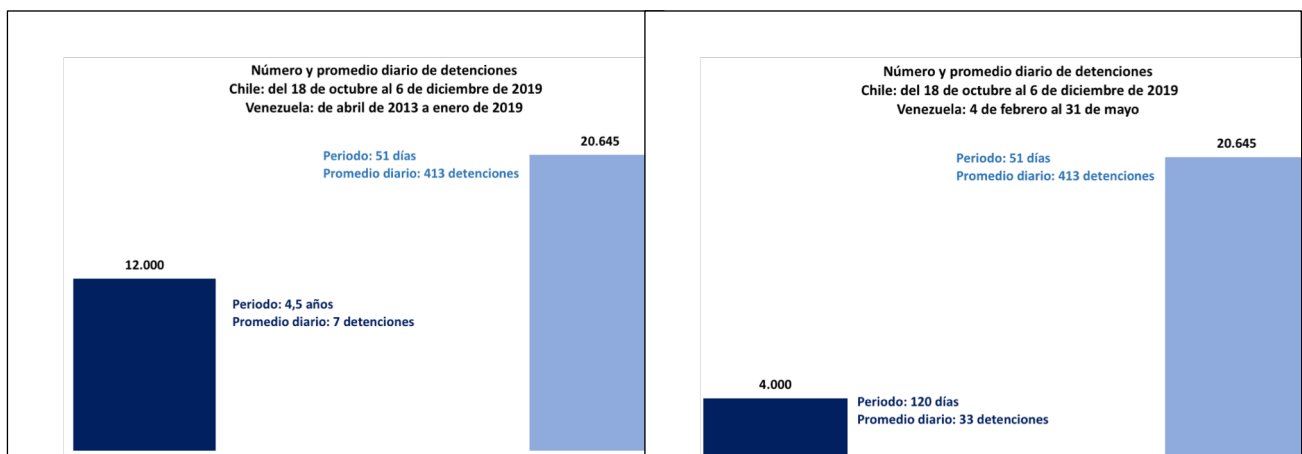
Existen estándares aplicados en Chile para evaluar la gravedad de las violaciones de DD.HH. registradas y denunciadas desde el 18 de octubre, **y el estándar de gravedad ha sido determinado tanto por la Corte Suprema como por el propio Presidente**. Los parámetros son relevantes porque se han fijado frente a la comunidad internacional, por lo que **aplica el principio de reciprocidad que forma parte de la costumbre en el Derecho Internacional y se aplica entre regímenes democráticos con Estado de Derecho**.

- **Decisión de acoger la solicitud de extradición del ex Presidente peruano, Alberto Fujimori.** La Corte Suprema de Chile adoptó la decisión de extraditar al ex Presidente en 2007 basándose en dos criterios jurídicos: la calidad del ex Presidente como máxima autoridad del Estado con capacidad de mando; y la gravedad de las violaciones de DD.HH. (ejecuciones, torturas y mutilaciones) ocurridas durante su mandato.
- **El principio de reciprocidad que implica aplicar internamente el mismo estándar de respeto a los DD.HH. que una máxima autoridad del Estado le exige fundadamente a otra.**  
 Como otros mandatarios, **el Presidente Sebastián Piñera en 2018 adhirió al informe de la OEA sobre crímenes de lesa humanidad imputados al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro**. De acuerdo con el principio de reciprocidad, ese estándar de gravedad e imputabilidad que sí es evidentemente exigible en el caso de la situación venezolana, es exactamente el mismo que se le puede exigir al Presidente Piñera, más aún tratándose de un régimen democrático con Estado de Derecho.
  - La OEA estableció en su **“Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”**, emitido el 29 de mayo de 2018, que los hechos ocurridos podían servir de base para acusar al Presidente venezolano las graves y **“sistemáticas”** violaciones a los DD.HH porque había un **“patrón de conducta repetido o la comisión periódica o continua interrelacionada”**.
  - **Comparando las cifras que le dan sustento al informe sobre Venezuela de la OEA con las chilenas, salvo por las ejecuciones extrajudiciales registradas en Venezuela -y que hasta el 6 de diciembre ascienden a 4 las presuntamente ocurridas por acción de militares y 2 por al interior de comisarías de Carabineros-, la gravedad y reiteración sostenida en el tiempo de las violaciones a los DD.HH. son más alarmantes, especialmente si se considera que ocurren en democracia.**

**Los casos de abuso sexual, las detenciones masivas y la violencia ejercida contra los menores de edad, son más elevados en Chile sólo en 51 días, que aquellos informados por la OEA para Venezuela en periodos que van de los 120 días a los 4,5 años.**

**Tortura sexual:** conforme a lo informado por la ONG “Comité de Familiares de Víctimas” (Cofavic), la OEA señaló en su informe que entre febrero y mayo de 2014 en **Venezuela** hubo **“26 casos de tortura sexual con características similares de desnudamiento forzado y, en algunos casos, violación”** ocurridos a lo largo de **120 días**. El 6 de diciembre la CIDH informó para **Chile** **“26 casos por violación o abuso sexual por parte de agentes del Estado”** sólo durante los primeros **50 días**. Para el mismo periodo, el INDH reportó la interposición de **108 querrelas por violencia sexual**, de las cuales **4 son concretamente por violación y 104 por desnudamientos amenazas de violación y tocaciones**.

**Detenciones:** la OEA sindicó en su informe *“patrones sistemáticos de actuación”* de los cuerpos de seguridad del Estado para realizar *“detenciones y encarcelaciones”* generándose arrestos en **Venezuela** de **“más de 12.000 personas” “durante cuatro años y medio”**, a un promedio de **“7 personas detenidas cada día”**. Tomando un periodo más breve, coincidente con el chileno al concentrar las mayores protestas contra el régimen de Venezuela, la OEA informó la detención de **4.000 manifestantes en los 120 días** corridos entre el 4 de febrero y el 31 de mayo de 2014, alcanzando un **promedio de 33 detenciones diarias**. Por su parte, la CIDH informó que en **Chile** hubo **“20.645 detenciones, al menos 950 personas en prisión preventiva”, durante los primeros 50 días**, registrándose un **promedio de 413 detenciones diarias** al 6 de diciembre.



**Fuente:** Elaboración propia con base en el “Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, 29 de mayo de 2018; e Informe de la Sala de Situación de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 6 de diciembre de 2019.

**DD.HH. de niñas, niños y adolescentes (NNA):** la OEA informó que durante la primera ola de protestas masivas -4 de febrero al 31 de mayo de 2014- se detuvo a 372 NNA en un lapso de 120 días; y que de 2017 a 2018 -1 de abril al 13 de abril- hubo 442 arrestos del mismo grupo etario. Conforme a ello, y dando cuenta del sometimiento a torturas a NNA, determinó que *“la persecución de niños y adolescentes por el régimen venezolano viola normativa internacional relacionada al bienestar de la niñez”*.

Respecto de Chile, al 6 de diciembre la CIDH informó que la Fiscalía Nacional investigaba 422 violaciones a los DD.HH. de NNA, contemplando denuncias por *“simulacros de ejecuciones, grave maltrato físico y verbal, golpizas, hacinamiento en lugares sin ventilación”, “desnudamientos”, “tocamientos” y golpes reiterados “en la zona genital con un bastón de servicio de Carabineros”*.

Por su parte, al 11 de noviembre la Defensoría de la Niñez contabilizó **79 casos de NNA lesionados a nivel nacional, de los cuales 46 (58,8%) correspondían a lesiones por golpes, perdigones, balines, bala y lacrimógenas.**

Tipos de lesiones	Casos
Sin información	29
Lesiones corporales	24
Perdigón	13
Sin lesiones	4
Balín	3
Bala	3
Lacrimógenas	3
<b>Total</b>	<b>79</b>

**Fuente:** Presentación efectuada ante la Audiencia de Oficio, CIDH, 174° periodo de sesiones, Quito, Ecuador.

- En cuanto a la declaraciones, mientras el Presidente Maduro afirmó que *“si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, nosotros iríamos al combate”*; el Presidente Piñera indicó que aumentaban su responsabilidad porque habían sido un *“mensaje claro de amenaza, intimidación y agresión”* a la población. Comparativamente, el Presidente Piñera, anunció el estado de excepción dictaminando que *“estamos en guerra contra un enemigo poderoso”* para enmarcar la salida de los militares.

**Por tanto, la gravedad de las acciones y omisiones presidenciales no sólo están establecidas por la naturaleza de las violaciones de DD.HH cometidas, sino que también por la evaluación de gravedad de las conductas que han realizado las máximas autoridades del país, incluido el propio Presidente.**

## CONCLUSION

A nivel constitucional y legal, en Chile existen claras obligaciones del Presidente en materia de DD.HH. Desde 18 de octubre de 2019 **se ha generado un cuadro de graves violaciones a los DD.HH.** que están contenidas en el libelo acusatorio, **por acciones y omisiones presidenciales que generaron las condiciones y permitieron su ocurrencia.**

La actuación más grave del Presidente es que, frente a las graves denuncias, **no hay constancia alguna de que adoptó todas las medidas correctivas eficaces, oportunas, necesarias y suficientes que la ley le autoriza** para corregir las situaciones que generaron las violaciones a los DD.HH. conforme a la Constitución, los compromisos internacionales y la ley chilena, plenamente vigentes.

**El juicio político que se decide es una medida extrema de responsabilidad constitucional, pero es parte fundamental del sistema democrático. En un sistema democrático las autoridades asumen su responsabilidad en un caso de graves violaciones de DD.HH., acción que más que debilitarlo, fortalece el compromiso democrático** porque restablece el acuerdo ético, político y social sobre la centralidad de los DD.HH.

**El proceso de acusación constitucional determinará cuál es el verdadero estándar del siglo XXI en Chile acerca de cómo se valoran jurídica y políticamente los DD.HH., y cuáles son los límites infranqueables, aún en momentos de crisis, que garantizan la plena vigencia de esos derechos.**